



---

**RE: DESCORRO EXCEPCIONES - RADICADO:540013105003-2023-00146-00**

---

**Desde** Juzgado 03 Laboral Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jlabccu3@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Fecha** Lun 30/09/2024 17:13

**Para** Alejandro Duarte <alejandroduartenotificaciones@gmail.com>

Buenas tardes

Se acusa recibo del traslado de las excepciones y se agrega al proceso.

MARTIN MORALES

---

**De:** Alejandro Duarte <alejandroduartenotificaciones@gmail.com>

**Enviado:** viernes, 27 de septiembre de 2024 17:00

**Para:** Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; Mónica Rey Garcia <mrey@realcontract.com.co>; notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; accioneslegales@proteccion.com.co <accioneslegales@proteccion.com.co>; Juzgado 03 Laboral Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jlabccu3@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** DESCORRO EXCEPCIONES - RADICADO:540013105003-2023-00146-00

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito allegar escrito DESCORRE EXCEPCIONES del demandado COLFONDOS, lo anterior para su conocimiento y demás fines legales pertinentes.

--

Favor Confirmar recibido.

Cordialmente,

**LUIS ALEJANDRO DUARTE CACERES**

**C.C: 1.094.264.658 de Pamplona (N. de S.)**

**T.P: 338.159 del C.S.J.**





## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

Señores

**JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA**

**E. S. D.**

**RADICADO:** 540013105003-2023-00146-00  
**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA  
**DEMANDANTE:** LYDIA ELENA MONSALVE BARBOSA  
**DEMANDADOS:** COLPENSIONES Y OTROS.

Yo, **LUIS ALEJANDRO DUARTE CACERES**, identificado como aparece al pie de mi firma, vecino de esta ciudad y actuando en calidad de apoderado de la parte demandante, Comedida y Respetuosamente me permito **DESCORRER LAS EXCEPCIONES** planteadas por el Demandando COLFONDOS. Conforme a lo siguiente:

### **1. DEL TERMINO PARA ACTUAR**

Se tiene que dentro del presente proceso la entidad demandada COLFONDOS, fue notificado por conducta concluyente, del auto admisorio de la reforma de demanda estableciendo una fecha límite para ejercer el derecho de defensa, desde la fecha de publicación del estado electrónico donde publico la admisión de la reforma el día 17 de septiembre de 2024, estableciendo un plazo para ejercer su derecho a la defensa hasta el 23 de septiembre de 2024. Conforme lo anterior se establece que la apoderada del demandado actuó en termino y esta notifica a esta parte el día 18 de septiembre de 2024, del escrito de contestación de reforma de demanda, conforme lo anterior esta parte descorrerá la contestación de las excepciones planteadas conforme los siguientes argumentos.

### **2. DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS**

#### **2.1 De la prohibición legal de traslado de régimen pensional**

De la excepción que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que esta no se encuentra encaminada a prosperar, teniendo en cuenta que la señora LYDIA ELENA MONSALVE BARBOSA, solicito el traslado de régimen pensional en el mes de diciembre de 1998, estando afiliada en la entidad COLPENSIONES y pasar a cotizar en COLFONDOS.

Ahora bien, COLFONDOS en su excepción de prohibición de traslado, manifiesta que:



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

“(…)

El artículo 2 de la Ley 797 de 2003 introdujo modificaciones al artículo 13 de la Ley 100 de 1993. En virtud de dichas modificaciones, se establece que un afiliado no podrá cambiar de régimen cuando le resten diez (10) años o menos para alcanzar la edad requerida. La normativa es la siguiente:

*Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. (...)*

*e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)*

*(...)”*

Conforme lo anterior y si nos detenemos a analizar el caso de fondo junto con la normatividad enunciada tenemos que; mi mandante nació el 18 de octubre de 1969, por lo cual, al momento de solicitar el traslado de régimen pensional en el periodo de diciembre de 1998, tenía tan solo la edad de 29 años. Por lo cual mi mandante aún no había cumplido ni siquiera la “mitad” de su recorrido laboral para el cumplimiento del requisito de obtener su pensión de vejez.

Por lo cual, no se puede configurar excepción de prohibición de traslado a favor de COLFONDOS, pues como muy bien se indicó y se demuestra en el presente proceso, mi mandante tan solo tenía la edad de 29 años. Por lo cual mi mandante aún no había cumplido ni siquiera con la “mitad” de su recorrido laboral para el cumplimiento del requisito de obtener su pensión de vejez; dicho así la entidad a quien se le imputa la responsabilidad del daño ocasionado por omisión del deber de informar recae en la demandada.

### **2.2 De la relación con el deber de asesoramiento según lo establecido por la Superintendencia Financiera o Inexistencia de la obligación**

De la excepción que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que esta no se encuentra encaminada a prosperar, teniendo en cuenta que la señora LYDIA ELENA MONSALVE BARBOSA, nunca recibió asesoramiento o información completa al realizar el cambio de régimen pensional, pues el deber de brindar la información



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

clara y suficiente, no recae en el afiliado, pues este no esta en calidad de soportar una lesión que afecta directamente sus prestaciones sociales.

La Honorable Corte Constitucional en su sentencia T-106180, estable lo siguiente:

“(…)

**Tal argumento es equivocado, puesto que ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información.**

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, **es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.**

(…)” **(subrayado y negrilla fuera de texto)**

Conforme lo anterior, es claro que el libelo de la demanda y dentro de los argumentos facticos relevantes, existe que los demandados, incluyendo COLFONDOS omitieron el deber legar de brindar, entregar, asesorar de manera íntegra a mi mandante, ocasionándole un perjuicio irremediable en sus prestaciones sociales.

Por lo cual, no se puede configurar excepción de relación con el deber de asesoramiento a favor de COLFONDOS, pues como muy bien se indicó y se demuestra en el presente proceso, no existió un el deber legar de brindar, entregar, asesorar de manera íntegra a mi mandante.

### **2.3 De la Afiliación libre, espontánea y Buena Fe**

De la excepción que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que esta no se encuentra encaminada a prosperar, teniendo en cuenta que los hechos dañinos en los que se enmarca el presente proceso, se establecen en el deber legal de información que fue omitido por las demandadas, por lo cual, el afiliado debe contar con todo el asesoramiento o información completa, clara y congruente frente al traslado hecho, pues dicha información es pilar de las garantías que deben existir para el goce de sus derechos prestacionales.

La entidad demanda COLFONDOS indica en su argumento que:

**Calle 22n # 2 – 116 Prados Norte, Cúcuta, N. de S.**

**Tel: 3154891385 – 3003598999**

**e-mail: [alejandroduartenotificaciones@gmail.com](mailto:alejandroduartenotificaciones@gmail.com) – [lalejo062@hotmail.com](mailto:lalejo062@hotmail.com)**



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

“(…)

mi representada informó de manera adecuada y completa a la demandante, antes de su vinculación a COLFONDOS S.A., acerca de las condiciones en las que opera el RAIS. Dada la particularidad de cada caso concreto, la persona encargada de explicar tales condiciones es el asesor que tramita la solicitud de cada individuo, como ocurrió en este caso.

Lo anterior queda claramente demostrado al suscribir el formulario de afiliación, en el que la demandante dejó constancia de que su elección fue efectuada de forma libre, espontánea y sin presiones.

En relación con los formularios de afiliación previstos por mi representada y suscritos por la parte demandante al momento de vincularse, estos formularios se ajustan a la Ley y contienen la información requerida para este propósito, lo cual se corrobora con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994

(…)”

Del anterior argumento es claro establecer que si bien es cierto para materializar el traslado de régimen de fondo de pensión, se debe diligenciar como requisito el formulario de afiliación; acompañado del diligenciamiento del formulario debe ir en conjunto por la asesoría o deber de información del funcionario adscrito al fondo al que se está inscribiendo el afiliado, que frente al caso en concreto no se realizó, simplemente mi mandante formalizo el formulario de afiliación únicamente con la intención de materializar el traslado de fondo. Pues la expectativa que tenía mi mandante al realizar el traslado de régimen pensional, se encontraba nublado por la ausencia, inexistencia y omisión de información por parte de la demandada. Dicho así al estar viciado tal traslado, el derecho de retracto no lo vio necesario de solicitar, pues como muy bien se ha indicado. Tal información nunca la recibió mi mandante.

Ahora bien, mi mandante actuó de buena fe para formalizar el traslado de régimen pensional ya que ella como cotizante o afiliada su único interés es el obtener su derecho pensional de manera justa, digna, conforme su historial laboral, por lo la buena fe según la Honorable Corte Constitucional establece que:

“(…)”

**La buena fe es un valor que se fundamenta en imperativos sociales como la verdad, la honestidad y la credibilidad, que soportan la palabra empeñada y que se presumen en todas las actuaciones de las personas, constituyéndose en pilar esencial del sistema jurídico. Lo anterior implica que el ciudadano común espera que una declaración de voluntad, surta los efectos que normalmente produciría para un caso análogo al suyo. Por lo**



## A.D. ABOGADOS

Luis Alejandro Duarte C.

Luis Alfonso Duarte P.

**tanto, la buena fe es principio orientador de nuestro sistema jurídico, que cumple la función de garantizar la relación del ciudadano con sus pares y con la administración. Respecto de esta última, la buena fe es una máxima de optimización que debe orientar los procedimientos al interior de las entidades, con el objeto de construir relaciones basadas en la confianza, que permitan la materialización de las expectativas del ciudadano, más aún si estas surgen bajo un marco de legalidad.**  
(...)"

Dicho así, mi mandante actuó de buena fe, sumado los principios que enmarcan su actuación en materia laboral y frente al presente caso en materia pensional pues no solo al iniciar el traslado de régimen pensional, mi mandante busca una condición beneficiosa, pero que las demandadas omitieron en brindar información para que mi mandante visualice si en realidad esta siendo beneficiada conforme al traslado que inicio.

La Honorable Corte Constitucional en su Sentencia T-508 del 2013, establece lo siguiente:

"(...)

Quinta. Principio de la condición más beneficiosa.

5.1. Los fundamentos del principio de la condición más beneficiosa están consignados en el artículo 53 de la Constitución Política, donde después de ser incluido como principio mínimo fundamental de la protección al trabajo que "en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho" se adopte la situación más favorable al trabajador, se prescribe, en su inciso final, que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, "no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores."

5.2. Sobre ello, en fallo C-168 de abril 20 de 1995, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, se expuso (no está en negrilla en el texto original):

"La 'condición más beneficiosa' para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador."

En cuanto a la consagración legal de tal principio en materia laboral, la precitada sentencia agregó (tampoco está en negrilla en el texto original):

"El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de favorabilidad, así: 'En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad'; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere del 'in dubio pro operario', según el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas interpretaciones, se ordena prohibir la que resulte más favorable al trabajador."

Respecto de su aplicación en asuntos pensionales, allí mismo se explicó:

"En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador." (...)"

### **2.4. De la eficacia de la afiliación y a la nulidad de la afiliación y/o vicio del consentimiento**

De las excepciones que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que estas no se encuentran encaminadas a prosperar, teniendo en cuenta los





## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

lineamientos jurisprudenciales que se aplican al caso de fondo. Pues como muy bien se ha establecido y demostrado, el deber de informar esta a cargo y es una obligación que corresponde únicamente a las administradoras de fondos de pensiones.

La Honorable Corte Suprema de Justicia tiene como lineamiento Jurisprudencial lo siguiente:

*“(…)*

*El traslado de régimen en el sistema pensional puede generar diversos efectos para los afiliados. En varios de los casos analizados la consecuencia común es la pérdida del régimen de transición, aunque no la única, contemplada en la normatividad que regía cada uno de los regímenes. Según el artículo 36 de la ley 100 de 1993, la protección que otorgaba se extinguía cuando se escogía inicialmente o por traslado, al régimen de ahorro individual. Decía la disposición mencionada:*

*“(…) Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (…)”*

*Es decir, existe la libertad de elección del sistema pensional, pero trasladarse al régimen de ahorro individual, elimina los beneficios del régimen de transición, el cual era solo aplicable en la administradora de pensiones del régimen de prima media, que en los casos analizados resultaba más beneficioso para el afiliado al momento de adquirir la condición de pensionado.*

*(…)*

*Al respecto indicó que “fue parcial para la decisión que llevó al actor a optar por cambio de régimen, y que posteriormente se advierte equivocada, cuando al reclamar su derecho a la edad de los sesenta años, el camino que le ofrecen es el del retiro programado, con la venta de los bonos pensionales en el mercado secundario, con enorme sacrificio económico, circunstancia que no se le hizo saber por parte de la administradora siendo éste su deber”.*



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

---

En líneas posteriores enfatizó, respecto a los deberes y obligaciones de los fondos privados en los casos de traslado entre regímenes:

*“(…) Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.*

*Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.*

*Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.*

*En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.*

*No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa*



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.

(...)

en sentencia SL19447-20174, la Sala profundizó sobre la constatación del deber de información, afirmó que era ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación era insuficiente; sobre este particular, explicó que:

“Por demás las implicaciones de la asimetría en la información determinante para advertir la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la Ley, sino soportadas en principios de <> en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que <>.”

Y concluyó:

“De manera que, conforme lo discurrido queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.”

la sentencia SL1452-2019<sup>1</sup>, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, decanta un conjunto de subreglas que respaldan la procedencia de la ineficacia del traslado de régimen pensional, ante la falta de prueba que acredite el cumplimiento del deber de información por los fondos privados de pensiones

<sup>1</sup> SL1452-2019 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo - Aclaración de Voto Magistrados Rigoberto Echeverri Bueno y Jorge Luis Quiroz Alemán



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

Entre otras, contempla que: "(...) el deber de información consagra cada vez más un mayor nivel de exigencia, es así como identificó tres etapas, conforme a las normas que han regulado el tema, las cuales clasifica en tres periodos a saber: i) desde 1993 hasta 2009; ii) desde de 2009 hasta 2014 y, iii) de 2014 en adelante. (...)". De acuerdo con ello, expone el avance y desarrollo de la obligación relativa al deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones de suministrar información necesaria y transparente, de asesoría, buen consejo y doble asesoría.

Precisó que antes de surtir el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, la administradora privada de pensiones tiene el deber de brindar al afiliado información suficiente, clara, comprensible y oportuna sobre las características de los dos regímenes pensionales y las consecuencias reales de abandonar el régimen al que se encontraba vinculado, entre ellas, la pérdida del régimen de transición.

Aclaró que "ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información"

(...)

Ahora bien, en cuanto los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, el máximo órgano de la jurisdicción 10 ordinaria ha sostenido que trae como consecuencia que, en caso de que previamente se haya realizado devolución de saldos al afiliado, se autorice a la entidad de seguridad social pagadora para que deduzca de las mesadas pensionales, la indexación e intereses de los recursos que hayan sido entregados.

En tal sentido la Sala Laboral, ha precisado que, aunque se entiende que los recursos son recibidos de buena fe, la pensión a cargo del régimen de prima media con prestación definida, tiene que estar soportada financieramente en las cotizaciones de sus afiliados. Y si bien ha señalado que no hay lugar a la restitución de los dineros recibidos de buena fe, refiriéndose al caso de las pensiones, si ha enfatizado que, de ordenarse el reconocimiento del derecho principal (pensión), procede la compensación o restitución, pues los recursos son el soporte financiero de la prestación pensional.



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

*En efecto, ha indicado que, el reconocimiento de una prestación pensional supone que el beneficiario cuenta con el capital correspondiente a las cotizaciones con las que se va a financiar, de manera que la pensión es el fruto del trabajo de muchos años y su otorgamiento está respaldado con los aportes o cotizaciones sufragadas durante la vida laboral, esto de acuerdo con lo preceptuado en el literal l) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.*  
*(...)"*

Del anterior lineamiento jurisprudencial es claro establecer que las excepciones que plantea COLFONDOS no están encaminadas a prosperar, pues la realidad fáctica indica que a mi mandante se le omitió el deber de informar por parte de las entidades demandadas, pues como se ha mencionado reiteradamente el deber de información está a cargo de las administradoras de fondos de pensiones a lo cual deberán suministrar información necesaria y transparente, de asesoría, buen consejo y doble asesoría.

### **2.5 De la Falta de Legitimación por pasiva.**

De la excepción que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que esta no se encuentra encaminada a prosperar, teniendo en cuenta que los hechos dañinos en los que se enmarca el presente proceso, fueron producto del doloso actuar pues la obligación a cargo del deber de información es única y exclusivamente de las administradoras de fondos pensionales.

Dicho así, en materia laboral, el desarrollo probatorio es fundamental, pues el a quo, haciendo uso al principio de inmediación, puede establecer si lo que existe es una intermediación o una tercerización, es decir, puede llegar a determinar si existe una afectación directa a los derechos laborales frente al presente caso, siendo facultado en materia laboral para decidir extra y ultra petita. Y es que, de entenderse la excepción planteada como la indicada en el numeral 3°. del artículo 100 del C.G.P., esta es, inexistencia del demandado, ha de subrayarse que la misma tan sólo se configura cuando se demanda a una persona natural o jurídica inexistente, sea porque desapareció del ámbito jurídico, por muerte en el caso de persona física o por disolución y liquidación de la sociedad, asociación o fundación si se trata de persona jurídica, por lo cual y frente al caso de fondo no indica que COLFONDOS es una entidad que se encuentra activa. Deslegitimando la excepción que busca desprenderse de la presente litis

Ahora bien, en relación con la falta de legitimidad por pasiva, el Consejo de Estado en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

*"2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el*



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.

(...). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(...)"

En este orden de ideas, la excepción de falta de legitimación por pasiva planteada por la demandada, no se perfecciona a favor de la misma, pues esta entidad como administradora de fondo pensional tiene a cargo el deber de información que frente al caso en concreto omitió brindar a mi mandante.

### **2.6. De la ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A.**

De la excepción que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que esta no se encuentra encaminada a prosperar, teniendo en cuenta lo esbozado por COLFONDOS en cuanto a lo siguiente:

"(...)

La ratificación se reflejó en el hecho de que el actor no ejerció su derecho a retractarse de la afiliación al Fondo de Pensiones administrado por mi representada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1161 de 1994, manifestando por escrito su decisión en ese sentido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su vinculación

(...)"

Conforme a lo anterior, se debe precisar que mi mandante no ejerció derecho a retracto, en base que no existió el debido asesoramiento por parte de la entidad demandada, pues como muy bien se ha indicado el deber de información esta a cargo de las administradoras de pensión, por lo cual, si mi mandante hubiese recibido una información oportuna sobre las características de los dos regímenes pensionales y las consecuencias reales de abandonar el régimen al que se encontraba vinculado, entre ellas, la pérdida del régimen de transición. Mi mandante hubiese ejercido el derecho a retracto. Pero como la demandada omitió su deber de información, conculco el daño a mi mandante y no logro ejercer su retracto a tiempo correcto.





## A.D. ABOGADOS

Luis Alejandro Duarte C.

Luis Alfonso Duarte P.

### 2.7. De la prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado.

De la excepción que plantea la entidad COLFONDOS, se debe precisar que esta no se encuentra encaminada a prosperar, teniendo en cuenta el lineamiento jurisprudencial frente a la presente acción.

La Honorable Corte Suprema de Justicia tiene como lineamiento Jurisprudencial lo siguiente:

“(…)

La Sentencia SL1688 y SL1689 de 2019<sup>2</sup>, la Sala señala entre otros efectos de la declaratoria de ineficacia que, **la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible**, en tal sentido, sostiene que:

“En efecto, de manera reiterada y pacífica, **la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ello.** Dicho de otro modo: no prescriben los hechos o estados jurídicos, pero sí los derechos u obligaciones que dimanen de esa declaración. De allí que sea viable la declaratoria de una situación jurídica y a continuación declarar prescritos los derechos patrimoniales derivados de ese reconocimiento.”

**Con esta decisión, precisa el criterio, según el cual “si bien N el derecho a demandar la ineficacia del traslado y la pensión o su valor real, es imprescriptible**, sí lo son las mesadas pensionales no reclamadas dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, conforme lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”  
(…)” **(subrayado y negrilla fuera de texto)**

En este orden de ideas y conforme el anterior lineamiento jurisprudencial, es claro que mi mandante inicio la presente acción en termino, pues no existe un término de prescripción para el derecho pensional que pretende reparar mi mandante en las pretensiones del presente proceso. Por lo cual la excepción planteada por la demanda COLFONDOS no esta encaminada a prosperar.

### 3. PETICION ESPECIAL

Conforme todo lo anterior expuesto, esta parte descorre las excepciones planteadas por el demandado COLFONDOS S.A. y solicita muy respetuosamente a

<sup>2</sup> MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo - Aclaración de Voto Magistrados Rigoberto Echeverri Bueno y Jorge Luis Quiroz Alemán



## **A.D. ABOGADOS**

*Luis Alejandro Duarte C.*

*Luis Alfonso Duarte P.*

---

su despacho desechar cada una de las mismas teniendo en cuenta que no se materializa el proceder de ninguna de las excepciones planteadas y en consecuencia se deberá continuar con las etapas restantes dentro del proceso de la referencia o en su debido efecto fijar fecha para celebrar la audiencia Inicial que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines legales pertinentes.

Atentamente;

**LUIS ALEJANDRO DUARTE CACERES**  
C.C: 1.094.264.658 de Pamplona (N. de S.)  
T.P: 338.159 del C.S.J.